ADJUDICACION JUDICIAL DE APOYOS**RAD. 2022-367**

Al Despacho de la señora Juez con Subsanción de la Demanda. Pasa para resolver.

Bucaramanga, 5 de agosto de 2022

ERIKA ANDREA ARIZA VASQUEZ
Secretaria

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA

Bucaramanga, cinco (5) de agosto de dos mil veintidós (2022).

En atención a la constancia secretarial que antecede entra el Juzgado a resolver al respecto.

No obstante, a que la parte actora no realizó cabalmente el saneamiento conforme se le indicara mediante auto del 26 de julio del año en curso, toda vez que, aunque se le señaló la falencia, pasó por alto, concretamente el definir los tiempos de duración de cada uno de los actos jurídicos a celebrar (numeral 3 del art. 5 de la ley 1996 de 2019); y así mismo, también, el que es imprescindible tener siempre en cuenta los criterios generales para la actuación judicial de que trata el art. 34 de la ley 1996 de 2019, especialmente su numeral cinco (5), lo cual no hizo, y dicho sea de paso, pertinente es recordar que, hay que pensar en los **Apoyos** como las distintas formas de asistencia que requiere la persona con discapacidad para tomar decisiones y ejercer su capacidad jurídica, en otras palabras, corresponden al “**qué**” **necesita** para tomar decisiones en condiciones de igualdad; sin embargo, dado que, especialmente estas falencias, pueden sanearse en el decurso del proceso, el Despacho no rechazará la solicitud en cuestión, y en su lugar **requerirá** a la parte activa para que cumpla completamente con aquellos deberes señalados en las mencionadas reglas.

De otro lado, frente a la solicitud denominada MEDIDAS CAUTELARES Y/O PROVISIONALES Y PRETENSIONES SUBSIDIARIAS, cabe destacar que éstas son las mismas que las consignadas en el acápite PRETENSIONES PRINCIPALES, aquellas se denegarán por las siguientes razones:

Las medidas cautelares o provisionales aquí solicitadas son el instrumento contemplado por nuestro ordenamiento jurídico para precaver y que los fines del proceso puedan cumplirse, por ende, deben estar predeterminadas en la ley, dado que la regla procesal se encarga no solo de tipificarlas, sino de especificar los procesos en los que proceden.

En ese orden de ideas, ni la ley 1996 de 2019, ni ninguna otra norma especial, regulan la posibilidad de que, en un proceso verbal sumario de Adjudicación judicial de Apoyos, se pueda como medida provisional o cautelar, designar personas de apoyo en la persona cuya discapacidad se alega. De hecho, si se examina a profundidad el art. 38 de la mencionada ley, en el que se asienta el presente proceso, se puede concluir con facilidad que la adjudicación de apoyos deprecada en el presente asunto, es precisamente **el objeto de fondo** del proceso promovido por la señora OMAIRA CARDENAS RODRIGUEZ.

Dicho de otra manera, la designación de apoyos implica la evacuación de todo un trámite (verbal sumario) donde solo se concibe su determinación mediante una sentencia que tenga en cuenta elementos de juicio que puedan brindar el convencimiento suficiente y necesario en torno a las relaciones de confianza, amistad, parentesco o convivencia entre las personas que puedan ser nombradas como apoyo, y la persona titular del acto jurídico **concreto** para el cual se solicite el mismo. Al respecto, iteraremos, pero esta vez, conforme lo explico la Corte constitucional:

“(...) es necesario resaltar que estos mecanismos de apoyo no tienen poderes ilimitados. Con el objetivo de impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, el artículo 5º de la ley establece un régimen de salvaguardias. Este señala que cualquier medida que busque apoyar la voluntad de una persona debe regirse por los siguientes criterios:

“1. Necesidad. Habrá lugar a los apoyos solo en los casos en que la persona titular del acto jurídico los solicite o, en los que, aun después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles y medidas de apoyo, no sea posible establecer de forma inequívoca la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico.

2. Correspondencia. Los apoyos que se presten para tomar decisiones deben corresponder a las circunstancias específicas de cada persona

3. Duración. Los apoyos utilizados para celebrar un determinado acto jurídico deberán ser instituidos por períodos de tiempo definidos y podrán ser prorrogados dependiendo de las necesidades de la persona titular del mismo. Ningún apoyo podrá establecerse por períodos superiores a los establecidos en la presente ley.

4. Imparcialidad. La persona o personas que presten apoyo para la realización de actos jurídicos deben, en el ejercicio de sus funciones como apoyo, obrar de manera ecuánime en relación con dichos actos. Ello implica, entre otras cosas, que las personas que prestan apoyo deben actuar en congruencia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 4º de la presente ley, respetando siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, con independencia de si quien presta apoyo considera que debería actuar de otra manera, respetando también el derecho a tomar riesgos y cometer errores. Así mismo, las personas que prestan el apoyo no podrán influenciar indebidamente la decisión. Se considera que hay influencia indebida cuando la calidad de la interacción entre la persona que presta el apoyo y la que lo recibe presenta señales de miedo, agresión, amenaza, engaño o manipulación.”

En ese sentido, en cualquier mecanismo de apoyo deben concurrir los criterios de necesidad, correspondencia, duración e imparcialidad para cumplir satisfactoriamente con el régimen de salvaguardias que establece el artículo 5°. De esta manera, los conceptos de apoyo para la toma de decisiones y las salvaguardas ponen en el centro la voluntad y autonomía de la persona con discapacidad, “superando por completo los sistemas que se sostienen a partir del “mejor interés” de la persona con discapacidad.”

Corolario de lo anterior, se infiere que la determinación de las medidas de apoyo, no pueden establecerse de manera previa al agotamiento de un periodo probatorio que permita esclarecer la configuración de sus presupuestos, de ahí que no baste con las declaraciones de la parte demandante y con las historias clínicas aportadas, para determinar si hay o no a la designación de apoyos peticionada.

La otra razón a argumentar, es que, además de ser cónyuges las partes, estar la demandante postulada como persona de apoyo del demandado y tener ellos un contrato social derivado de la empresa INSURCOL SAS, hace que inevitablemente enmarque la solicitud en cuestión, dentro de un **conflicto de intereses**, lo cual a priori se pensaría propio, para el presente caso, del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas, empero, la tantas veces mentada ley 1996 de 2019, en su art. 45 nos enseña sobre las **Inhabilidades para ser persona de apoyo**, y en su numeral 2 limita la posibilidad de serlo ante la existencia de conflictos de interés entre la persona designada como apoyo y la persona titular del acto jurídico, lo cual conforme se expuso líneas arriba, sucede en el caso bajo estudio.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga.

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR la anterior demanda de Proceso VERBAL SUMARIO – ADJUDICACION JUDICIAL DE APOYOS, instaurada a través de apoderado judicial por OMAIRA CARDENAS RODRIGUEZ en relación con ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ.

SEGUNDO: DESE a la presente solicitud el trámite determinado en el artículo 38 de la Ley 1996 de 2019.

TERCERO: NOTIFICAR a ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ, y córrasele traslado por el término de **DIEZ (10) DÍAS** para que, conteste, aporte y pida las pruebas que pretenda hacer valer. En el evento de que la condición de salud de la parte demandada no se propicia para una notificación directa, dicha comunicación, se surtirá con la participación del Ministerio Publico, conforme lo preceptuado en el art. 40 de la ley 1996 de 2019.

CUARTO: ORDENASE a la parte interesada anexar al proceso, la valoración de apoyos realizada a ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ, exhortando a la parte para que tenga en cuenta que, dicho informe debe cumplir a cabalidad con los mínimos que exige la ley 1996 de 2019 (canon 38) y especialmente lo regulado en el art. 11 de la ley 1996 de 2019 y su decreto reglamentario (487 de 2022), además de armonizar con los criterios y formas señaladas en la parte considerativa.

QUINTO: NOTIFIQUESE a la Procuradora Judicial para Asuntos de Familia, adscrita a este Despacho, a fin de que intervenga conforme a las facultades y obligaciones que le otorga de ley.

SEXTO: REQUIERASE a la parte accionante para que complemente la presente solicitud, conforme lo planteado en la parte motiva.

SEPTIMO: NEGAR las medidas cautelares solicitadas, conforme a lo expuesto en la motiva.

OCTAVO: RECONOCER al Dr. ESTEBAN CARDENAS RODRIGUEZ, identificado con la C.C. 91.246.330 y T.P. 70.472 del C.S.J., Vigente, con canal digital coincidente en el Registro Nacional de Abogados, conforme consulta efectuada en la página Web de la Rama Judicial, como mandatario judicial de OMAIRA CARDENAS RODRIGUEZ en relación con el señor ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ, en los términos y con las facultades conferidas en el poder.

NOTIFIQUESE.

Ana Luz Flórez Mendoza
ANA LUZ FLOREZ MENDOZA
Juez

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRONICO

Hoy 08-08-2022 a las 8:00 a.m. y bajo el No.89
anota en estados el auto anterior para notificarlo a las partes.

Secretaria: _____
ERIKA ANDREA ARIZA VASQUEZ